



Capítulo 9

Aula Magna

Migraciones internacionales

Aldo Panfichi / Editor



**FONDO
EDITORIAL**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ. 90 AÑOS

La publicación del presente trabajo fue posible gracias a la colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones.

Aula Magna - Migraciones internacionales

Primera edición, noviembre de 2007

© Aldo Panfichi, editor

De esta edición:

© Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2007

Plaza Francia 1164, Lima 1 - Perú

Teléfono: (51 1) 626-6140

Fax: (51 1) 626-6156

feditor@pucp.edu.pe

www.pucp.edu.pe/publicaciones

Ilustración de cubierta: Gabriel Alayza

Diseño de cubierta e interiores: Juan Carlos García Miguel

Derechos reservados. Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.

ISBN: 978-9972-42-831-9

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2007-11816

Impreso en el Perú - Printed in Peru

Los inmigrantes salen a la calle. La primavera de 2006

Jorge Durand

Once social change begins, it cannot be reversed;
 you cannot uneducated the person who has learned to read;
 you cannot humiliate the person who has pride;
 and you cannot oppress the people who are not afraid anymore.

César Chávez

Introducción

Sobre la actitud o el carácter político de los inmigrantes se había dicho muy poco, casi nada. Se los considera políticamente apáticos, individualistas por excelencia y que enfrentan los problemas sociales y económicos de la población de origen con opciones personales. Se decía de ellos que «votaban con los pies», que abandonaban el país.

Por añadidura, se consideraba que los migrantes eran la «válvula de escape» de los problemas sociales, económicos y políticos del país. Se decía que su escapismo, pesimismo, individualismo y oportunismo permitían que se mantuviera el orden de las cosas, que no cambiara el régimen, que no se rebelara el pueblo, que, en fin de cuentas, no explotara.

En la discusión sobre los «nuevos movimientos sociales», nunca se consideró su existencia siquiera como una posibilidad. Las feministas, los gays, los antinucleares, los *altermundistas*, todos tenían un lugar en el espectro de la posmodernidad política, menos los indocumentados de los Estados Unidos, los *san papiers* de Francia, los «sudacas» de España.

Pero fue la propuesta del representante de Wisconsin James Sensenbrenner Jr., Border Protection, Antiterrorism and Illegal Immigration Control Act, aprobada por la Cámara de Representantes, tan extrema, represiva y restrictiva que generó una reacción inmediata de repudio entre la comunidad inmigrante. Los primeros en reaccionar fueron los inmigrantes de origen latino, en especial mexicanos; luego,

se adhirieron otras comunidades de inmigrantes y, finalmente, una amplia y diversa gama de grupos solidarios de la sociedad norteamericana.

No solo eso: la reacción espontánea se convirtió en activismo, agitación, organización, acción colectiva y manifestación pública de protesta. Es difícil encasillar un fenómeno de esta naturaleza; los términos tradicionales de nuevo movimiento social y acción colectiva no se ajustan a la magnitud, extensión y difusión de las marchas y manifestaciones de la primavera de 2006.

Según Xochitl Bada, quien ha seguido paso a paso este proceso, la primera manifestación de rechazo a la ley antiinmigrante fue nada menos que en Philadelphia el martes 14 de febrero y, de acuerdo con fuentes periodísticas, se congregaron unos cinco mil manifestantes. Nada mal para un lugar de flujos migratorios recientes.

La segunda manifestación de protesta tuvo lugar en Washington D.C., el lunes 6 de marzo de 2006, donde se congregaron cerca de treinta mil manifestantes (Bada *et al.* 2006). Fue una primera llamada de atención en el corazón histórico y político del imperio, pero para muchos pasó desapercibida.

Cuatro días después, el viernes 10 de marzo, la prensa reseñó atónita la gran marcha de Chicago, que congregó a cerca de trescientos mil manifestantes. Esta tendencia se refrendó el sábado 25 con dos grandes manifestaciones: la de Los Ángeles, que congregó a cerca de medio millón, y la de Denver, que tuvo unos cincuenta mil manifestantes. Finalmente, en Detroit ocurrió la última manifestación masiva de marzo, el lunes 27, a la que asistieron cincuenta mil personas (Bada *et al.* 2006). En otras muchas ciudades, se dieron también manifestaciones de menor envergadura.

En abril, hubo otras tantas marchas y manifestaciones, pero cabe destacar la increíble marcha de Dallas, que llegó a tener cerca de cuatrocientos mil manifestantes. Allí hubo una gran participación de los estudiantes y una atinada conducción por parte de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la veterana de todas las organizaciones latinas. Hay que mencionar también la multiétnica marcha de Nueva York, que congregó a cerca de cien mil personas (Cordero *et al.* 2006).

Finalmente, en abril se dio un *encore* y las masas salieron a las calles una vez más, el día primero de mayo, para celebrar el «día del trabajador migrante» y protestar por haber sido tratados como criminales. Los Ángeles, Chicago, San José, Denver, San Francisco y otras muchas pequeñas y medias ciudades vieron colmadas sus calles de manifestantes de todas las razas, nacionalidades y religiones.

En total, se movilizaron cerca de 3,5 millones de personas entre el 7 de febrero y el primero de mayo. Y la preparación y organización de todo este movimiento apenas se inició a comienzos de enero.

Fue una verdadera marea de manifestaciones públicas a las cuales se unieron las llamadas «huelgas» de estudiantes de preparatoria y, finalmente, la gran protesta del día primero de mayo, Día del Trabajo en el mundo entero, menos en los Estados

Unidos. Día de manifestaciones públicas, pero también de boicot en contra del consumo, para poner en evidencia el aporte de los inmigrantes a la economía y lo que implicaría un día sin inmigrantes en Estados Unidos.

Cuatro factores, cuatro aliados y un detonador explican esta inusitada reacción de la población inmigrante en los Estados Unidos, un hecho que —se decía— era totalmente inesperado, pero que, visto con cuidado, tuvo un largo y complejo proceso de gestación.

Los factores, premisas o condiciones que permitieron la emergencia de esta manifestación colectiva son de carácter migratorio, político, social y cultural. Las alianzas se dieron con los sindicatos, las iglesias, los empleadores y un sector de la clase política. Finalmente, el detonador fue la propuesta de ley de Sensenbrenner, aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Representantes.

1. El factor migratorio

En los últimos veinte años, se ha dibujado un nuevo perfil del migrante indocumentado que vive y trabaja en Estados Unidos. El cambio se debe a la consolidación de un patrón migratorio diferente del que prevaleció en la década de 1980. En la actualidad, se estima en 12 millones el número global de inmigrantes indocumentados, de los cuales el 57% son mexicanos, 24% latinoamericanos, 9% asiáticos, 6% europeos y 4% africanos (Pasell 2005). El panorama había sido diferente en 1986, cuando se hizo la reforma al sistema migratorio (IRCA) y se legalizaron 3,2 millones de indocumentados, de los cuales el 76% fueron mexicanos.¹

Dos cambios relevantes se desprenden de estos datos: que la inmigración indocumentada se multiplicó por tres en veinte años y que la proporción de mexicanos indocumentados disminuyó veinte puntos porcentuales. Por el contrario, se incrementó notablemente la inmigración indocumentada del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, y, en menor medida, de otros países. Los mexicanos siguen teniendo un peso específico muy alto, pero ya no son los únicos actores en el escenario.

El incremento en el *stock* de inmigrantes indocumentados se debió, fundamentalmente, a la política migratoria implementada en 1986 (IRCA) de legalización y control fronterizo. La legalización de tres millones de indocumentados trajo, a su vez, a otros tantos familiares de los ya legalizados, sea por la vía legal o la informal. Por otra parte, el control fronterizo, los muros y el incremento en el presupuesto de la Patrulla Fronteriza generaron un incremento en los costos y los riesgos de cruzar la frontera de manera subrepticia. De este modo, los migrantes mexicanos y centroamericanos que

1 Se estima que cerca de un millón de indocumentados quedaron fuera del programa, por lo que se supone que, en 1986, había unos cuatro millones de indocumentados, aproximadamente.

lograban cruzar la línea no podían ni querían volver de manera recurrente como lo hacían anteriormente, por lo que alargaron notablemente su estancia en los Estados Unidos (Massey *et al.* 2002).

Otro elemento por tomarse en cuenta es el cambio notable que se ha dado en cuanto a la distribución geográfica de los migrantes mexicanos y centroamericanos en las dos últimas décadas. Si bien los lugares de destino tradicionales como California, Texas e Illinois siguen siendo predominantes, se ha dado un cambio notable en la distribución porcentual. El caso de California es paradigmático: en 1990, concentraba al 58% de los mexicanos y, en el año 2000, al 43%, lo que significa una pérdida de quince puntos porcentuales (Durand y Massey 2004). Por el contrario, crecieron nuevos estados de destino como Georgia, Nevada, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Utah, por decir algunos (Zúñiga y Hernández-León 2005).

Como consecuencia del incremento notable de migrantes latinos y su dispersión geográfica, se han dado, por primera vez, encuentros, alianzas, solidaridades, contradicciones y conflictos entre latinos de diferentes nacionalidades (Smith 2006, Fortuny y Solís 2006, Durand y Téllez 2006). Nueva York dejó de ser un bastión de puertorriqueños y dominicanos; ahora comparten barrios, escuelas y trabajos con mexicanos, colombianos y ecuatorianos. Miami se ha convertido en territorio latinoamericano y ya no exclusivamente cubano. Algo nuevo está sucediendo en Washington D.C., Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Dallas.

La identidad latina ha empezado a surgir a partir del contacto entre mexicanos, centroamericanos, caribeños y sudamericanos. Las identidades nacionales van quedando atrás, especialmente en la segunda generación, y surge la identidad latina. Más aún, cada quien puede asumir varias identidades al mismo tiempo, sin que esto aparezca como contradictorio. Se puede ser mexicano, chicano y latino al mismo tiempo.

El número, la distribución geográfica y el contacto entre diversas comunidades de latinos forman parte del cambio de patrón migratorio que permitió la fusión de una comunidad muy amplia y dispersa ante dos objetivos comunes: el repudio a la criminalización y la lucha por la legalización, que no es otra cosa que la lucha por la ciudadanía.

Pero, sobre todo, fue la política migratoria de los Estados Unidos la que convirtió a los trabajadores extranjeros, muchos de ellos temporales, en inmigrantes, en residentes en sentido literal, sin importar su condición legal. Este cambio es fundamental muy especialmente para el caso del contingente migrante mexicano, que era el más propenso a considerarse y ser considerado como trabajador temporal.

2. Factor político

Aproximadamente cada veinte o veintidós años, se da, en los Estados Unidos, una gran reforma migratoria. En 1921, se limita la inmigración europea; en 1942, se inaugura el Programa Bracero con México; en 1964, se establece el programa de cuotas por país; en 1986, se promulga una amplia amnistía y un programa de trabajadores agrícolas (IRCA), y, en 2007, se espera la promulgación de una nueva ley.

Si los ritmos de la historia significan algo, podemos afirmar que las condiciones estaban maduras para una reforma migratoria y que los migrantes mismos, los académicos, los políticos, las ONG y los militantes de organizaciones de oriundos sabían que había llegado el momento en que se tenía que discutir el tema migratorio y presionar por una reforma. No solo eso: los sucesos del 11 de setiembre de 2001 forzaron la situación y vincularon el tema migratorio con el de la seguridad nacional, por lo cual resultaba perentorio afrontar directamente la situación y desvincular, en la medida de lo posible, la lucha contra el terrorismo de la reforma migratoria.

Por lo general, en los Estados Unidos, el problema migratorio se resuelve de manera desesperada con el lema de que «hay que hacer algo» (*do something*). Sin embargo, en realidad, el asunto es mucho más complejo e intervienen factores políticos, sociales, económicos, culturales, bilaterales, fronterizos. Hacer *algo* no soluciona nada; simplemente sirve para superar la coyuntura por un tiempo y para que los políticos en turno se vayan a sus casas tranquilos creyendo haber solucionado el problema.

A diferencia de la propuesta de Sensenbrenner y varias otras, la excepción que confirma la regla fue la iniciativa de los senadores Kennedy y McCain, una propuesta mucho más mesurada, que afrontaba el problema de la seguridad nacional de manera inteligente y el de la migración con realismo y generosidad. Obviamente, este proyecto fue desechado en las discusiones del año 2005, pero ha sido retomado en 2007.

En todo caso, la vinculación entre seguridad nacional y migración polarizó el debate y generó una oleada de propuestas nativistas, de corte antiinmigrante y muy particularmente antimexicanas. Aunque los números ya no sean tan significativos, todavía se identifica a la migración mexicana como prácticamente la única variable explicativa de la migración «ilegal». Además, la condición de vecinos hace de los mexicanos el primer objetivo por enfrentar. De Centroamérica se puede encargar el mismo México, haciendo el trabajo sucio a cambio de alguna concesión.

Otro factor novedoso por tomarse en cuenta es que el gobierno mexicano y, en menor medida, otros gobiernos latinoamericanos, entraron en el debate público norteamericano con propuestas sobre posibles convenios, acuerdos o programas migratorios. La administración del presidente Fox fue particularmente asertiva en este asunto, a diferencia de las administraciones priístas que aplicaban «[...] la política de la no política» (Durand 2005).

Este ambiente caldeado, política y electoralmente, contrasta notablemente con la reforma de 1986 (IRCA), que pasó de madrugada. Nadie le hizo mucho caso; incluso, muchos de los migrantes indocumentados desconfiaban de ella. No obstante, finalmente, transformó por completo el patrón migratorio (Massey *et al.* 2002).

En 1986, se legalizó al 80% de los inmigrantes indocumentados y ninguno había salido a la calle para demandar nada. Fue una amnistía en todo el sentido de la palabra. Los que quedaron excluidos fueron los que llegaron después, en los primeros años de la década de 1980, que no podían demostrar que habían vivido y trabajado cinco años o que habían trabajado el último año en la agricultura. Paradójicamente, el grupo de excluidos fue fundamentalmente de origen centroamericano, que llegaban como secuela de las guerras en El Salvador, Nicaragua y Guatemala (Hamilton y Stoltz Chinchilla 2001, Menjívar 2000).

Y fueron los centroamericanos excluidos —muchos de ellos con amplia participación política en sus países de origen— los que dieron la batalla legal, política y organizativa para lograr procesos de legalización. Después de varios años de trámites, esperas, luchas legales y políticas, los nicaragüenses fueron reconocidos como refugiados y tuvieron derecho a la residencia permanente en 1997, con el programa conocido como NACARA (Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act), al cual también se acogieron algunos salvadoreños y guatemaltecos (Menjívar 2000).

Algo diferente sucedió con los salvadoreños y guatemaltecos, a quienes no se quería reconocer como refugiados; se los consideraba como «inmigrantes económicos». Muchos de ellos fueron deportados durante la década de 1980, algunos pocos recibieron asilo y otros empezaron juicios apoyados por diversas organizaciones no gubernamentales y religiosas (Hamilton y Stoltz Chinchilla 2001). Finalmente, en 1990, se concedió una modalidad temporal de protección: *Temporary Protected Status* (TPS), que les permitía trabajar, pero no se les concedía la residencia definitiva, como en el caso de los nicaragüenses. La medida fue renovada en varias ocasiones hasta que, en 1997, los juzgados concedieron una figura legal que protegía a todos aquellos que estuvieran en la misma situación (*class action law suit*). De este modo, decenas de miles de salvadoreños y guatemaltecos lograron regularizar a medias su situación (Menjívar 2000).

Este antecedente de lucha legal, política e, incluso, pública —porque llegaron a salir a las calles— es el antecedente inmediato de las grandes manifestaciones de inmigrantes y que da sustento al lema, tan popular en México, de «sí se puede».

Más aún, para el año 2004 los migrantes, sus organizaciones, abogados, políticos afines, académicos y representantes en Washington lograron ponerse de acuerdo y apoyar la propuesta de Kennedy y McCain. Abogados como Frank Sharry del National Immigration Forum trabajaron por años, haciendo *lobby* en Washington, para promover una propuesta de ley sensata y adecuada. La Asociación Tepeyac de Nueva York

fue otra agrupación que influyó para apoyar la propuesta. Había, por tanto, un plan, un diseño, una estrategia previa que apoyaba propuestas concretas y no solo un pliego de reclamos.

3. El factor social

A comienzos del siglo XXI, se dio un cambio fundamental en la composición de la población de los Estados Unidos. El censo de 2000 confirmó que los latinos eran la primera minoría y que habían superado a los afroamericanos. La población latina crece de manera natural a un ritmo alto pero, sobre todo, incrementa su población con la llegada de nuevos grupos de inmigrantes (550.000 anuales) Este componente foráneo refuerza su identidad cultural e idiomática, al mismo tiempo que debilita su posición dentro de la escala social, dado el tipo de trabajo, educación y vivienda al que acceden los migrantes recién llegados.

La movilidad geográfica de los latinos, a la que se ha hecho referencia anteriormente, ha derivado en un mayor contacto entre diferentes naciones de América Latina y el Caribe, lo que se refleja en un mayor índice de matrimonios entre latinos. Los padres de dos nacionalidades latinas diferentes procrean hijos que dejan en segundo nivel la nacionalidad de sus padres y asumen la identidad que les asigna el lugar de residencia. En el futuro tendremos, cada vez más, latinos desapegados de las identidades nacionales de sus padres.

Un hecho similar sucede con las organizaciones chicanas, por ejemplo, que han venido cambiando de nombre y admiten una identidad más amplia. Es notable el cambio que se ha dado en los centros de investigación universitarios, en los que cada vez hay menos centros de estudios chicanos, y más latinos o hispanos. Lo mismo sucede a nivel de organizaciones más amplias; el National Council of La Raza, mexicano o chicano de origen, es ahora mucho inclusivo. Las ONG y organizaciones que antes se identificaban como mexicanas o centroamericanas ahora van acogiendo a grupos de diversas nacionalidades. En 2004, surgió NALACC, la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas, que agrupa a casi una centena de organizaciones y está operando en siete ciudades de los Estados Unidos. De este modo, se va construyendo la nueva identidad panlatina, que complementa y apoya las identidades nacionales, regionales y comunitarias.

No es fácil ni automático este cambio. Durante el estreno de la película *Frida*, por ejemplo, hubo manifestaciones con pancartas en las que se decía: «Frida, ni chicana ni latina, ni hispana. MEXICANA». Lo nacional y el conjunto de símbolos siguen siendo un elemento aglutinador e identificador muy fuerte y difícil de olvidar.

En todo caso, la radio y la televisión se han encargado de uniformar a los latinos y proporcionarles mensajes generales, aceptables para todos. El lenguaje de los

locutores, periodistas y cantantes intenta moderar los acentos nacionales y regionales para establecer un acento híbrido más aceptable para todos. El comercio hispano se ha convertido en una tajada apreciable; ellos fueron los primeros en hablar de «mercado hispano» y en darle coherencia al término.

4. El factor cultural

Hay una diferencia básica entre el migrante temporal y el definitivo. El primero no tiene interés por integrarse, el segundo sí. Y esto marca una actitud diferente respecto de la sociedad de acogida. El patrón migratorio acuñado en 1986 (IRCA) rompió con el patrón de circularidad que existía entre México y los Estados Unidos. Los migrantes legales ya no regresaron y se volvieron definitivos, y los indocumentados alargaron su estancia todo lo posible y se convirtieron en establecidos. Es decir, se vieron forzados por las circunstancias a integrarse y alargar su estancia. De este modo, los mexicanos, han empezado a compartir una modalidad migratoria muy difundida entre los latinoamericanos, que llegan para quedarse.

La integración, no obstante, se da en el peculiar contexto del sistema clasificatorio racial de los Estados Unidos. Ya no existe un *melting pot* donde todos confluyen en el mismo rol. Propiamente, existen cuatro: el blanco (anteriormente *WASP*), el negro, el asiático y el hispano-latino.

El criterio para definir a los latinos es fundamentalmente cultural, a diferencia de los otros que tienen un mayor contenido racial. Los latinos son fundamentalmente mestizos y tienen tanto sangre europea como indígena, negra y asiática, de ahí que el censo norteamericano, en la actualidad, haya entrado en un predicamento y la categoría *white sea*, propiamente, la de *white not hispanic*, igualmente para la de *black*. Si se siguiera el mismo criterio, en la década de 1960, se habría tenido que decir *white not Irish or Italian*.

No obstante, a diferencia de los blancos que no quieren moverse de su casillero, y de los negros y asiáticos que no pueden hacerlo porque los delata el fenotipo, los hispano-latinos pueden, hipotéticamente, colocarse en el casillero de los blancos, los negros e, incluso, los asiáticos. No obstante, se les quiere encasillar como hispanos o latinos. Más aún, la comunidad hispano-latina en los Estados Unidos lo acepta, porque, si no, en la práctica y en la estadística, no existirían.

En la actualidad, ahora se prefiere utilizar el término de panlatino, aunque también se utiliza para el caso de los asiáticos, y podría utilizarse para los blancos y los negros. Hoy en día, los inmigrantes de Europa del Este, rusos por ejemplo, entran en el casillero «blanco».

Sin embargo, a pesar de la fuerza que tiene el sistema clasificatorio norteamericano y el *marketing* específico para los latinos —de ahí surge, precisamente, el término

de *hispano*, de *mercado hispano*—, entre ellos predomina, de manera muy notoria, la identidad nacional.

La identidad latina o hispana está en proceso de construcción, como lo ha estado la identidad latinoamericana o hispanoamericana, que nunca ha terminado de cuajar. Paradójicamente, la identidad latina o hispana en los Estados Unidos tiene mayor futuro que la de la patria grande.

Esta nueva identidad se construye a partir de cuatro elementos: un mismo origen continental latinoamericano, un fenotipo racial totalmente mestizado, una religión mayoritaria —católica—² y un mismo idioma compartido —el español—. Raza, religión, identidad nacional, idioma y cultura son elementos comunes, al igual que un mismo pasado colonial y un presente indígena-americano. Nos separa la identidad nacional, su espíritu, los traumas fronterizos, la historia particular, los contenidos educativos y la obcecación nacionalista.

En todo caso, en las manifestaciones de la primavera de 2006, marcharon juntos todos los latinos. En las primeras manifestaciones, se veían muchas banderas, principalmente mexicanas, aunque no en la del primero de mayo, en la que, por razones políticas, se optó por llevar banderas americanas; al fin y al cabo se solicitaba la legalización como el primer paso en el proceso de integración.

5. Los aliados

En el contexto de las movilizaciones de la primavera de 2006, más que de alianzas, hay que hablar de aliados. Una alianza política implica una serie de convenios y cierta participación en la toma de decisiones estratégicas. Un aliado, por el contrario, tiene un papel secundario, puede dar su apoyo o retirarlo, pero no se compromete directamente con la organización ni corre demasiados riesgos. Obviamente, puede capitalizar los beneficios.

El principal aliado de los migrantes y sus organizaciones fueron las iglesias, muy en especial la católica. La propuesta HR 4437 afectaba directamente sus intereses y sus funciones, de ahí que el cardenal de Los Ángeles, Roger M. Mahony, escribiera una carta al presidente Bush a las dos semanas de haberse aprobado la iniciativa de Sensebrenner. En ella se quejaba, de manera clara y precisa, al argumentar que la ley podía imponer sanciones a cualquier miembro de su comunidad que proporcionase servicios religiosos o de asistencia social. Incluso, llegó a afirmar que dar la comunión a un indocumentado podía interpretarse como un apoyo o un servicio espiritual y que ellos no podían pedir la documentación a todos aquellos que se acercaran a la misa.

2 Se estima que 70% de los latinos se autocalifican como católicos, 23% de ellos como protestantes en sentido genérico (Bada *et al.* 2006).

Efectivamente, la HR 4437 era bastante explícita al respecto y sancionaba de manera muy amplia a todo aquel que proporcionase algún tipo de ayuda o servicio a un inmigrante indocumentado. En términos bíblicos, se podría decir que la propuesta de ley castigaba al «buen samaritano». Así interpretaba el texto de la ley la organización católica Justice for Migrants: «Anyone or any organization who “assists” an individual without documentation “to reside in or remain” in the United States knowingly or with “reckless disregard” as to the individual’s legal status would be liable for criminal penalties and five years in prison. This could include church personnel who provide shelter or other basic needs assistance to an undocumented individual» (Justice for Immigrants).

La oposición de la Iglesia católica a la HR 4437, aprobada en la Cámara de Representantes por 239 votos contra 182, fue, sin duda, un elemento clave para cuestionar la viabilidad del proyecto y su posterior aprobación definitiva.

Un factor demográfico fue también tomado en cuenta. Los nuevos inmigrantes que llegan a los Estados Unidos provienen, en su mayoría, de Latinoamérica, son católicos y, lo que es más importante, son practicantes. El futuro de la Iglesia católica depende, en buena medida, del trabajo que pueda hacer con los latinoamericanos. De acuerdo con Passel (2005), el 81% de los once millones de migrantes indocumentados son de origen latino, de ahí el interés de la iglesia en los temas relacionados con la reforma migratoria y una pastoral para migrantes.

El comportamiento de la Iglesia durante las marchas de la primavera de 2006 fue fundamental, a pesar de ciertas ambigüedades y desacuerdos. A la jerarquía no le agradó que las marchas se hicieran en días laborables y que se añadiera a la protesta por la legalización el tema del boicot. Como quiera, a la hora de la salir a marchar, cientos de sacerdotes, religiosos y organizaciones tomaron las calles para protestar.

En algunas ocasiones, los jefes purpurados influyeron en algunos aspectos de la toma de decisiones. Por ejemplo, el obispo de Chicago condicionó su participación a que la concentración se realizara en el Grant Park de Chicago, aduciendo motivos de seguridad para la gente. Al parecer, el Cardenal quería evitar enfrentamientos con grupos opositores. En aquel primero de mayo, se realizó una celebración ecuménica con la participación de sacerdotes, pastores, rabinos y líderes religiosos.³

Según Cano (2006), la Iglesia pudo influir y, en algunos casos, controlar las marchas en el caso de las ciudades y poblaciones menores, ya que tiene mayor influencia desde el púlpito con sus feligreses. Esto no sucedió en las ciudades donde la población tiene otras alternativas de organización y comunicación.

3 Esta información proviene de una entrevista a Artemio Arreola el 2 de octubre de 2006 en Casa Michoacán, Pilsen, Chicago.

En segundo término, hay que considerar a los sindicatos como aliados coyunturales de este movimiento. Es bastante conocida la oposición frontal de las organizaciones obreras en contra de los trabajadores migrantes. El argumento era claro: los migrantes bajaban los salarios promedio al aceptar realizar tareas por menor remuneración. Por otra parte, en los Estados Unidos, los migrantes indocumentados han sido utilizados de manera recurrente como esquirols y rompehuelgas.

No obstante, en la última década, las cosas han empezado a cambiar. Dos argumentos han empezado a pesar para que los sindicatos hayan cambiado de opinión. En primer lugar, la clase obrera norteamericana ha empezado a diversificar sus orígenes raciales y, ahora, incluye a millones de trabajadores de origen latino. En el año 2005, se calculaba que existía un millón de trabajadores de origen mexicano sindicalizados. Más aún, en la actualidad, muchos líderes locales, seccionales y regionales son de origen latino.

Por otra parte, se constató, al interior de los sindicatos, una realidad insoslayable: el mundo laboral estaba cambiando rápidamente y se perdían muchos puestos de trabajo que se iban al extranjero. Por el contrario, los empleos que no se van a sustituir en el extranjero son los relacionados con los servicios, la agricultura y ciertas manufacturas. Allí está el futuro de la clase obrera, y esos puestos están copados por nuevos migrantes. No en vano se puso en marcha, en Los Ángeles, el programa promovido por los sindicatos de *Janitors for Justice*, que agrupa a los trabajadores de limpieza. Recientemente, se asociaron la central sindical AFL-CIO y NDLON (*National Day Laborer Organization Network*), la organización de los trabajadores jornaleros (esquirols), que buscan trabajo todos los días en ciertas esquinas.

No obstante, fueron las marchas de Chicago y Los Ángeles las que despertaron la conciencia del sindicalismo norteamericano. Nunca hubieran podido imaginar que se concentrara tal multitud de gente con tan pocos recursos. Es más, nunca habían logrado ellos, con toda su maquinaria burocrática, concentraciones semejantes. En algunos casos, los sindicatos apoyaron —como se dice allá, «pagaron los billes»—, pusieron sus carteles y se subieron al pódium. Sin embargo, fueron totalmente rebasados en la organización de las manifestaciones del primero de mayo. Al comienzo, estaban totalmente escépticos con la propuesta; argumentaban que, en los Estados Unidos, no se celebraba el primero de mayo y que, además, está estigmatizado porque ese día murieron varios policías.

Fueron los líderes comunitarios de Chicago los que organizaron la marcha del primero de mayo y, finalmente, tuvieron que plegarse los demás, entre ellos los sindicatos y otras organizaciones, como la de Los Ángeles, que proponían otras fechas.

En tercer lugar, hay que considerar a la clase política que se aprovechó del movimiento para subirse al estrado y aparecer en la televisión. Los organizadores solicitaron la participación de ciertos líderes políticos, en especial los de origen latino. En

cada caso, hay historias y anécdotas diferentes, pero la mayoría accedió a participar y, finalmente, muchos aparecieron en la manifestación. Para ellos, la duda radicaba en la fuerza que podía tener la movilización, en las medidas de seguridad —que eran prácticamente nulas, dado el tamaño de las marchas— y en el posible riesgo de enfrentamientos con la policía o grupos opositores. En Los Ángeles, apareció y habló el alcalde de origen mexicano Antonio Villaraigosa y, en Chicago, aparecieron, como por milagro y a última hora, el Gobernador, el Alcalde y varios congresistas.

Es difícil definir el impacto que tuvieron las marchas en la clase política y, sobre todo, en Washington. Lo que sin duda fue un efecto directo fue la Contrapropuesta del Senado S. 2611, de fines de mayo de 2006, que es mucho más moderada y que enterró definitivamente a la HR 4437.

Finalmente, un cuarto aliado, de bajo perfil, fueron los mismos empleadores. Si bien muchas de sus agrupaciones tienen su propia agenda en Washington —como los agricultores—, también empezaron a manifestarse una serie de patrones, pequeños productores y grandes empresarios en contra de la propuesta de Sensebrenner.

No era para menos. Los empleadores quedaban comprendidos en una serie de delitos al contratar, apoyar y encubrir a trabajadores indocumentados. Quizá la declaración más impactante fue la de J. W. Marriott Jr., CEO de *Marriott Internacional*, la cadena de hoteles más grande de los Estados Unidos. En una entrevista, declaró que, en sus 2.400 hoteles de los Estados Unidos, más de la mitad de los trabajadores eran de origen extranjero, que hablaban 47 lenguas diferentes y que sería imposible determinar la condición legal de cada uno de ellos. A pesar de ser republicano de tradición, se quejaba de la extrema derecha republicana enquistada en el Congreso. Es más, medio en broma medio en serio, dijo que coincidía plenamente con el cardenal de Washington Theodore McCarrick y que habían platicado de la posibilidad de compartir la misma celda si se aplicaba esa ley: «I guess we'll be in the same jail cell» (De Lollis 2006).

Según la Cámara Hispana del Comercio, el Programa Piloto Básico de verificación voluntaria de documentos, instrumentado en 1997, no funciona de manera adecuada. La base de datos es obsoleta, no se registran los cambios de status migratorio y, lo que es peor, cerca del 40% de los rechazados en realidad tienen sus papeles en regla (La Opinión Digital 2007).

Las grandes marchas se realizaron en días laborables (lunes y viernes) y era de esperarse que hubiera represalias contra los trabajadores faltantes. Sin embargo, no hubo incidentes mayores y, en muchos establecimientos menores, se cerró el negocio y el mismo patrón salió a marchar con sus empleados.

Este apoyo velado de los empleadores no puede contrarrestar la oleada nativista que se opone a la inmigración indocumentada, pero es un comienzo promisorio. Las redadas afectan a las empresas y a la economía del país, y ese punto es ciertamente sensible a la hora de sopesar los costos políticos.

6. Chicago, un caso que es preciso analizar

Los líderes comunitarios y de organizaciones migrantes de Chicago jugaron un papel fundamental en las grandes marchas de los días 10 de marzo y primero de mayo, que congregaron a cientos de miles de manifestantes, y también fueron los protagonistas principales para que el movimiento cobrara una dimensión nacional.

Después de la primera marcha en Philadelphia y la segunda en Washington, que congregó a treinta mil manifestantes, la marcha del día 10 de marzo de Chicago fue una explosión en la que participaron cerca de trescientas mil personas. En ese momento, la protesta cobró dimensión nacional y saltó a los medios de comunicación.

La posibilidad de que, durante la primavera de 2006, salieran entre tres y cinco millones de personas a la calles (Bada *et al.* 2006) se fue gestando a lo largo de muchos años de resistencia sumisa ante la agresión, el nativismo y las sanciones legales. No fue un acto espontáneo de protesta: fue el resultado de años de lucha, organización y protesta pública. Habrá que estudiar cada caso en detalle, muy especialmente las grandes marchas de Los Ángeles, Dallas y Chicago.

En lo que respecta a Chicago, podemos distinguir tres momentos en los que el mecanismo de «agresión-reacción» se puso en marcha. El primero fue en 1996, cuando el periodista del *Chicago Tribune*, Mike Royko, escribió un artículo bastante agresivo en contra de México, sobre el que dijo que era un «[...] corrupt narco-state»: «[...] Mexico was a useless country that should be invaded and turned over to Club Med» y «[...] there is no reason for Mexico to be such a mess, except that it is run by Mexicans» (Miner 2003).

La reacción no se hizo esperar; los comentarios de respuesta en las radios hispanas fueron recurrentes y se organizó una manifestación de unas tres mil personas en la explanada del edificio principal del diario, en pleno centro de la ciudad de Chicago. Se exigía una disculpa pública ante la comunidad mexicana y, si bien los activistas no quedaron plenamente satisfechos con la respuesta, esta tuvo que ser una de rectificación (Hinojosa 1999).

Dos años después, en 2005, fue entrevistada en la radio hispana una militante del grupo *Minutemen*, quien se expresó de manera muy agresiva en contra de los indocumentados. Pero lo que más indignó a la población hispana de Chicago fue que la persona era de origen hispano. Hubo respuestas del público y mesas redondas en varias radios con la participación de analistas, sacerdotes y líderes comunitarios. Finalmente, se convocó a una marcha de protesta. Para sorpresa de todos, tuvo una amplia difusión y una gran participación. Salieron a las calles, reclamando una amnistía, cerca de treinta mil personas.

La tercera manifestación fue la del día 10 de marzo de 2006, que contó con la participación de trescientas mil personas, y, finalmente, la gran manifestación del

primero de mayo, que congregó a más de medio millón de personas (Martínez y Piña 2006)

En estos tres casos, operó el mecanismo de «agresión-reacción», pero la respuesta fue posible porque existía una amplia organización comunitaria de base que pudo ser movilizada, fundamentalmente, a partir de las iglesias, los clubes, las radiodifusoras y los locutores hispanos.

Conclusiones

Es difícil caracterizar a las marchas de la primavera de 2006 como un «movimiento social», e, incluso, escapan a la definición de «manifestación colectiva». No se puede hablar de una organización nacional detrás de las marchas, sino de la suma de muchos esfuerzos. Al mismo tiempo, no fue una manifestación espontánea y requirió de múltiples esfuerzos, coordinación y negociación. Dos factores son determinantes para considerar que se trata de un fenómeno distinto: la magnitud (entre 3,5 y 5 millones de participantes) y el carácter nacional del fenómeno (270 ciudades). En muy pocos casos, se da la coincidencia de manifestaciones masivas con una cobertura de carácter nacional y con un impacto generalizado en los medios de comunicación.

Es incluso más impactante el hecho de que una manifestación de protesta de tal magnitud y difusión se haya llevado a cabo sin ningún incidente que lamentar. No se reportó ni un vidrio roto y no hubo detenidos, a pesar de que en algunos casos hubo contramanifestantes y agresiones de ciertos grupos. Se trató de algo totalmente distinto de lo que sucedió en Francia durante el otoño de 2005.

El único incidente que lamentar fue el suicidio del joven Anthony J. Soltero, de quince años, que tomó la terrible decisión después de haber sido expulsado de su colegio y amenazado por las autoridades de que iban a denunciar a sus padres como indocumentados y los iban a deportar. Anthony había sido uno de los organizadores de los *walk out* que realizaron miles de estudiantes secundarios en California y Texas.

Muchos analistas han opinado acerca de la posibilidad de que esta avalancha de manifestaciones se repita. Que suceda o no es irrelevante. Lo importante es que se dieron, que la gente salió a las calles, después de estar tantos años callada, sumisa e invisible. Las marchas respondieron al tamaño de la agresión y a la gran cantidad de población y organizaciones que se vieron aludidas, entre ellas los grupos étnicos, las iglesias, los sindicatos y los empresarios.

Como diría Héctor Cordero (Cordero *et al.* 2006), se trató de la «tormenta perfecta». Y este tipo de fenómenos sociales y ambientales requieren de la confluencia de una serie de factores y condiciones especiales que son muy difíciles de conjuntar, prever y, sobre todo, reproducir.

En síntesis, se trató de un fenómeno social masivo nacional, pluriclasista, multiétnico, ecuménico, apartidista, multilocal y transgeneracional. Ya se ha mencionado su magnitud y su difusión. Pero también es relevante señalar la participación de distintos sectores sociales (obreros, patronos, profesionales, profesores, estudiantes, religiosos), y la confluencia y el apoyo de diferentes grupos étnicos, fundamentalmente latinos, pero también asiáticos, africanos, musulmanes; el apoyo y participación de las iglesias católica, protestante judía y musulmana; el carácter apartidista de las manifestaciones, a pesar de la participación de dirigentes políticos; la participación de múltiples poblaciones, que se sumaron a las grandes manifestaciones ciudadanas; finalmente, la participación de adultos, jóvenes y niños en todas las marchas, lo que le dio un carácter familiar y transgeneracional a la protesta.